

**Expte. N°1746-2014 - “S., N. I. y Otro c/ J. D. F. y Otros s/ Daños y perjuicios” –
CNCIV – SALA A – 29/10/2019**

“S., N. I. y otro c/ J. D. F. y otros s/ Daños y perjuicios”

LIBRE N° 1746/2014

En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 29 días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “A” de la Excm. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: “S., N. I. y otro c/ J. D. F. y otros s/ Daños y perjuicios”, respecto de la sentencia de fs. 471/478 el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores: SEBASTIÁN PICASSO – HUGO MOLTENI – RICARDO LI ROSI.

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. SEBASTIÁN PICASSO DIJO:

I. La sentencia de fs. 471/478 hizo lugar a la demanda promovida por C. L. F. y condenó a D. F. J. a abonar a la sucesión de la demandante la suma de \$275.000, con más intereses y las costas del juicio. Asimismo, hizo extensiva la condena a SMG Compañía Argentina de Seguros S.A., en los términos del art. 118 de la ley 17.418.

El pronunciamiento fue apelado por las partes. La actora a fs. 492/494 vta. se agravía por los montos reconocidos en primera instancia en concepto de “daño físico” y “daño moral”, que estima reducidos. Además, solicita la aplicación de una y media tasa activa de interés a partir del 1/8/2015. Esta presentación fue replicada por el demandado a fs. 512/517.

Por otro lado, a fs. 496/506 vta. se agravió el Sr. F. D. J. por la responsabilidad que se le atribuyó en la sentencia en crisis. También, por los montos reconocidos al actor por los rubros “incapacidad sobreviniente”, “gastos de farmacia, radiografías y asistencia médica” y “daño moral”. Solicita la aplicación de una sanción por temeridad y malicia y por pluspetición inexcusable.

Por su parte, la citada en garantía expresó agravios a fs. 507/509, y se queja porque, a su entender, el monto otorgado en concepto de “daño moral” resulta elevado. Pide además la aplicación de una tasa de interés menor.

La actora contestó estos agravios a fs. 519/521.

II. Memoro que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino que pueden centrar su atención únicamente en aquellos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (art. 386, Código Procesal).

Creo menester poner de resalto que, si bien a partir del 1 de agosto de 2015 ha entrado en vigor el nuevo Código Civil y Comercial, los hechos ventilados en el sub lite (y por ende, la constitución de la obligación de reparar) han acaecido durante la vigencia del Código Civil derogado. Por consiguiente –y con excepción de lo que enseguida diré respecto de la cuantificación del daño- la cuestión debe juzgarse –en principio- a la luz de la legislación derogada, que mantiene ultractividad en este supuesto (art. 7, Código Civil y Comercial de

la Nación; vid. Roubier, Paul, *Le droit transitoire. Conflit des lois dans le temps*, Dalloz, Paris, 2008, p. 188/190; Kemelmajer de Carlucci, Aída, *La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 158).

Debe hacerse excepción a esta regla en lo que respecta a las normas relativas a la cuantificación del daño, dado que ellas no se refieren a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino solo a las consecuencias de ella, y no varían la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, pues se limitan a sentar una pauta para su liquidación. En este sentido dice Kemelmajer de Carlucci: “Hay cierto acuerdo en que debe distinguirse entre la existencia y la cuantificación del daño. La segunda operación debe realizarse según la ley vigente en el momento en que la sentencia determina la medida o extensión” (Kemelmajer de Carlucci, Aída, *La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes*. Segunda parte, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2016, p. 234). Por este motivo las reglas contenidas en los arts. 1741 -último párrafo-, 1746 y concs. del Código Civil y Comercial son directamente aplicables al sub lite.

Asimismo señalo que, incluso en los aspectos que continúan siendo regidos por la legislación derogada, las disposiciones del Código Civil y Comercial constituyen una valiosísima pauta interpretativa, en tanto condensan las actuales tendencias doctrinales y jurisprudenciales y expresan además la intención del legislador de nuestros días (esta sala, 25/6/2015, “C., Jéssica María c/ B., Carlos Ricardo y otros s/ Daños y perjuicios”; ídem, 30/3/2016, “F., Celeste Ester c/ D. P., Virginia Gabriela y otro s/ Daños y perjuicios”, expte. n.º 11.725/2013; 11/10/2016, “R., Jorge Oscar c/ A., Adrián Bartolomé y otro s/ Nulidad de acto jurídico” y “A., Adrián Bartolomé y otro c/ R., Jorge Oscar s/ Restitución de bienes”, exptes. n.º 47.289/2001 y 38.328/2003; ídem, CAC y C, Azul, sala II, 15/11/2016, “Ferreira, Rodríguez Amelia c/ Ferreira Marcos, y otra s/ Desalojo”, LL 2017-B, 109, RCCyC 2017 (abril), 180; Galdós, Jorge Mario, “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, LL 16/11/2015, 3).

Por otra parte aclaro que, al cumplir los agravios de la actora, la crítica concreta y razonada que prescribe el art. 265 del Código Procesal, en aras de la amplitud de la garantía de defensa en juicio, y conforme al criterio restrictivo que rige en esta materia (Gozaini, Osvaldo A., *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado*, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, p. 101/102; Kielmanovich, Jorge L., *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado*, Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, t. I, p. 426), no propiciaré la sanción de deserción que postula el demandado a fs. 512/517.

Finalmente, es conveniente explicar brevemente por qué, pese a algunos avatares legislativos, continúa plenamente vigente la doctrina plenaria elaborada a lo largo del tiempo por esta cámara. En efecto, si bien el art. 303 del Código Procesal fue derogado por el art. 12 de la ley 26.853, en virtud del art. 15 de aquella norma tal disposición recién entraría en vigor a partir de la efectiva integración y puesta en funcionamiento de los tribunales que allí se crearon (vid. la acordada n.º 23/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Ahora bien, esos tribunales nunca vieron la luz, y de hecho, el art. 4 de la ley 27.500 abrogó –a su vez– la ley 26.853 –con excepción de su art. 13– y reinstauró el recurso de inaplicabilidad de ley y la obligatoriedad de los fallos plenarios.

III. A fs. 7/12 se presentó C. L. F. e inició demanda de daños y perjuicios contra D. F. J. – en su carácter de titular de la residencia Geriátrica R. L. – y la citada en garantía SMG

Compañía Argentina de Seguros. Relató que era una persona de la tercera edad, que se movilizaba con la ayuda de una silla de ruedas, sin control de esfínteres y con alteraciones del horario nocturno de descanso, circunstancias que la llevaron a la decisión de internarse en el establecimiento del demandado. Apuntó que el día 31 de marzo del año 2013 estaba sola en su habitación, a la espera del personal nocturno, y, como este nunca llegó, se desplazó en su silla de ruedas para pedir ayuda. Se dirigió hacia las oficinas que se encontraban en la parte delantera de la institución, y, cuando intentó bajar sola unos escalones, cayó de su silla de ruedas, lo que le provocó un corte en el arco superciliar derecho, una fractura del codo derecho, y el desplazamiento, fuera del fémur, de la prótesis que tenía.

A fs. 47/56 contestó demanda la citada en garantía SMG Compañía Argentina de Seguros S.A., quien desconoció la existencia del hecho.

A su turno, a fs. 163/167 vta. se presentó el demandado D. F. J. y dio su versión de los hechos. Dijo que la actora ingresó a la residencia geriátrica el 28 de abril de 2008 con 81 años de edad y un cuadro clínico delicado. Señaló que las caídas que sufrió la demandante a lo largo de su estadía fueron constantes e imposibles de controlar, ya que “la actora se tiraba de donde estuviere” (sic, fs. 164). Agregó que el día 31 de marzo de 2013 la Sra. F. fue llevada a su habitación, y que, cuando el personal fue a buscar pañales para el aseo y cambio nocturno, aquella se desplazó en su silla de ruedas y se cayó.

En su sentencia, el colega de grado tuvo por cierta la existencia del hecho; remarcó que era de aplicación la Ley de Defensa del Consumidor y que, por ende, existía en cabeza del proveedor una obligación de seguridad de resultado consistente en garantizar que la demandante no sufriera daños en el ámbito de la relación de consumo. Por lo tanto, condenó al dueño del geriátrico y a su aseguradora a indemnizar a la Sra. F.

IV.- En primer lugar, habrán de abordarse los agravios que introduce en esta alzada la demandada vinculados a la responsabilidad que se le adjudicó.

Corresponde señalar, ante todo, que en tanto la actora utilizó como destinataria final un servicio brindado por la demandada, se configuran los extremos definidos por los arts. 1 y 2 de la ley 24.240, por lo que es indudable que entre las partes medió una relación de consumo, en los términos del art. 3 de la mencionada norma. En consecuencia, la cuestión debe ser analizada a la luz de los arts. 42 de la Constitución Nacional y 5 y conec. de la ley 24.240, independientemente de que las partes lo hayan o no invocado, pues, como es sabido, corresponde al juez determinar el derecho aplicable a los hechos planteados por los litigantes, más allá de la calificación que éstos les hayan asignado (*iura novit curia*). Adicionalmente, surge del art. 63 de la norma citada que se trata de una ley de orden público y, como tal, debe ser aplicada de oficio por el juez (esta sala, 21/11/2012, “R., F. y otro c/ Parque de la Costa S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, RCyS 2013-II, 183). Por ello, esta parte del recurso debe ser rechazada.

Por lo tanto, pesaba sobre la residencia geriátrica –en virtud de los ya citados arts. 42 de la Constitución Nacional y 5 de la Ley de Defensa del Consumidor– una obligación de seguridad de resultado (esta sala, L. n° 587.865, 19/4/2012, “D. G., Patricia Adriana c/ Valle de Las Leñas S. A. y otro s/ Daños y Perjuicios”; L. 593.524, 30/5/2012, “R., C. A. c/ Metrovías S.A. s/ daños y perjuicios”; L. 599.423, 30/8/2012, “P. C., Luis Eduardo c/ ALCLA S.A.C.I.F.I. Y A. y otro s/ daños y perjuicios”; L. 590.706, 15/11/2012, “T., Roberto Félix c/ Swiss Medical S.A. y otro s/ daños y perjuicios”; L. 591.873, 21/11/2012, “R., Fabio y otro c/ Parque de la Costa S. A. y otro s/ daños y perjuicios”; entre muchos otros), como consecuencia de lo cual cualquier daño sufrido por el consumidor en el ámbito

de la relación de consumo compromete la responsabilidad objetiva del proveedor (conf. mis trabajos “Las leyes 24.787 y 24.999: consolidando la protección del consumidor”, en coautoría con Javier H. Wajntraub, JA, 1998-IV-753, “La culpa de la víctima en las relaciones de consumo. Precisiones de la Corte Suprema”, LL, 2008-C-562, y mi comentario al art. 10 “bis” de esa ley en Picasso, Sebastián – Vázquez Ferreyra, Roberto A. (dirs.), Ley de defensa del consumidor comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. I, p. 160 y ss. Vid. asimismo López Cabana, Roberto M., en Stiglitz, Gabriel (dir.), Derecho del consumidor, nro. 5, Juris, Buenos Aires, 1994, p. 16; Mosset Iturraspe, Jorge – Lorenzetti, Ricardo L., Defensa del consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 311; Hernández, Carlos – Frustagli, Mónica, comentario al art. 5 de la ley 24.240 en Picasso – Vázquez Ferreyra, Ley de defensa del consumidor comentada y anotada, cit., t. I, p. 96; Ariza, Ariel, “Contrato y responsabilidad por daños en el derecho del consumo”, en Ariza, Ariel (coord.), La reforma del régimen de defensa del consumidor por ley 26.361, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 128; Lorenzetti, Ricardo L., Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2003, p. 285).

Esta sala ha señalado que, dado que el objeto de la obligación de seguridad consiste, precisamente, en una garantía de indemnidad, su incumplimiento se produce por la simple existencia del daño en el marco de la relación de consumo, sin necesidad de otra prueba adicional. Al deudor que pretende su liberación compete, entonces, la prueba de que el cumplimiento de la obligación de seguridad se había vuelto imposible como consecuencia de un hecho que reúne los caracteres del caso fortuito (esta sala, L. 581.709, del 25/11/2011, publicado en LL 2011-F-10, y RCyS 2012-II-156, entre muchos otros).

Respecto de este último punto –como también lo puntualizó la sala en el precedente mencionado en último término–, señalo que la doctrina ampliamente mayoritaria afirma que la imposibilidad de cumplimiento, para extinguir la obligación (art. 888, Código Civil) y, al mismo tiempo, liberar al deudor de responsabilidad (arts. 513 y 514 del citado código), debe reunir los caracteres de objetiva, absoluta y no imputable al obligado. En particular, es preciso que se esté ante una imposibilidad absoluta (Bueres, Alberto J., “El incumplimiento de la obligación y la responsabilidad del deudor”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, n° 17 (Responsabilidad contractual), Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 113; Pizarro, Ramón D. – Vallespinos, Carlos G., Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3, p. 312; Colmo, Alfredo, De las obligaciones en general, Buenos Aires, 1928, p. 616; Boffi Boggero, Luis M., Tratado de las obligaciones, Astrea, Buenos Aires, 1986, t. 4, p. 567; Llambías, Jorge J., Tratado de derecho civil. Obligaciones, Perrot, Buenos Aires, 1967, t. III, p. 286 y 287; le Tourneau, Philippe - Cadier, Loïc, Droit de la responsabilité, Dalloz, París, 1996, p. 262; Larroumet, Christian, Droit Civil. Les obligations, París, 1996, p. 782; Radouant, Jean, Du cas fortuit et de la force majeure, Arthur Rousseau, Paris, 1920, p. 47), lo que significa que, como lo señalaba Osti, existe un impedimento para cumplir que “no puede ser vencido por las fuerzas humanas” (Osti, Giuseppe, “Revisione critica della teoria sulla impossibilità della prestazione”, Rivista di Diritto Civile, 1918, p. 220).

Por esa razón, la mera difficultas prestandi no es apta para eximir al obligado (Llambías, Obligaciones, cit., t. III, p. 287; Pizarro-Vallespinos, Obligaciones, cit., t. 3, p. 310). No obstante, corresponde poner de resalto que esta concepción debe ser morigerada por las exigencias de la buena fe y la prohibición del abuso del derecho (Bueres, “El incumplimiento de la obligación...”, cit., p. 116), pues, como bien lo enseña Lafaille, no puede entenderse a la imposibilidad “como una situación tal que resista a todo género de esfuerzo, y sí como aquello que humanamente corresponde exigir de la actividad a la cual

está comprometido el deudor” (Lafaille, Héctor, Tratado de las obligaciones, Ediar, Buenos Aires, 1947, t. I, p. 459 y 460).

En definitiva, como con acierto lo señala Gamarra, el carácter absoluto de la imposibilidad se relaciona con los requisitos de imprevisibilidad e inevitabilidad propios del caso fortuito. En tal sentido, apunta el autor citado: “imprevisibilidad e irresistibilidad no sólo deben considerarse desde la persona del deudor, sino que también imponen –de regla- una determinada consistencia y magnitud en el evento impeditivo, que es la que lo vuelve insuperable; hay imposibilidad absoluta cuando el obstáculo está dotado de una resistencia que lo torna invencible” (Gamarra, Jorge, Responsabilidad contractual, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1997, t. II, p. 172).

En el sub lite, no se discute que la demandante sufrió un daño en el geriátrico “R. L.” mientras se encontraba albergada en él, o sea, en el marco de su relación de consumo con aquel nosocomio. Competía al demandado, entonces, demostrar la imposibilidad de cumplimiento derivada del caso fortuito, en los términos de los arts. 513, 514 y 888 del Código Civil y 10 “bis” de la ley 24.240. Corresponde por lo tanto examinar si tal circunstancia ha sido acreditada en la especie.

En ese derrotero, destaco que el emplazado pretende hacer valer como defensa las condiciones personales de la Sra. F. Al respecto puntualizó, al momento de contestar la demanda: “las caídas sufridas a lo largo de su estadía en nuestra institución fueron lamentablemente bastante constantes e imposibles de controlar (...), ya que la actora de golpe se tiraba de donde estuviera, esto es de su cama o de su silla de ruedas, sin noción obviamente de lo que hacía, siendo una paciente que era atendida por dos personas atento la imposibilidad de moverla una sola persona” (sic, fs. 164, cuarto párrafo). Planteos estos que fueron reiterados por el quejoso al momento de expresar agravios.

Como puede observarse, es el propio demandado quien reconoció que las caídas de la Sra. F. eran habituales, afirmaciones que fueron corroboradas por la médica del establecimiento, Dra. M. de B. quien a fs. 325/326 relató: “lo que vi en la paciente un deterioro cognitivo severo provocado generalmente por el alzhéimer, podía ser una demencia vascular u otra cosa para estudiarla hay que hacerle una biopsia y no se suele hacer estudios de alta complejidad, pero el diagnóstico es demencia. Tenía úlceras crónicas en ambas piernas y se las curaba el médico de cabecera, que no era de la institución, con una preparación de él. La paciente no deambulaba porque había tenido un remplazo de cadera no exitoso, es decir que no podía caminar (...). Sufrió unas cuantas caídas, porque a veces tenía momentos de excitación y se ladeaba o se tiraba, se quería levantar o inclusive una vez se cayó de la cama (...). Se que hay tres chicas a la mañana y la cocinera, tres chicas a la tarde mas una chica que limpia, se que hay un muchacho de mantenimiento. A la noche esta la nochera, solo una persona” (sic).

En el mismo sentido, la auxiliar de enfermería L. A. remarcó: “la paciente estaba en silla de rueda no caminaba totalmente dependiente de la atención (...); le gustaba cantar cantaba mayormente una canción y tocaba el piano (...); tuvo caídas detallando que ella estuvo en una guardia y presencio la caída en el 31/3/2013 relata que ellos acuestan a los pacientes después de cenar y la Sra. f. fue llevada a la habitación con su silla de ruedas después me dirijo a buscar su pañal para higienizarla la dejo en el dormitorio y cuando regreso a los pocos minutos la paciente había avanzado hacia la puerta se sale de la habitación y la encuentro caída de frente contra el piso” (sic, fs. 351).

En definitiva, con lo expuesto quedó demostrado que el hecho que se debate en autos no fue imprevisible ni inevitable para el demandado J.

En el caso de autos, la demandante era una persona que había alcanzado la tercera edad (86 años al momento del hecho), entendida esta como la última etapa de vida de una persona, en la que el sujeto se encuentra más vulnerable y requiere de ciertos cuidados y una atención especial que la ayuden a sobrellevarla de la mejor manera posible. Cuando un establecimiento – como el del demandado – se dedica a esa tarea, debe extremar las medidas de seguridad tendientes a evitar que las personas cuyo cuidado se le ha confiado puedan sufrir perjuicios; por lo que mal puede ahora fundar su defensa en el hecho de la edad avanzada de la víctima, su estado de salud, sus condiciones personales o las caídas habituales de la demandante, cuando el cuidado de las personas con estas características es parte de su actividad.

En ese sentido, he señalado que la posibilidad de que la víctima pueda auto-dañarse debe ser prevista por el responsable en ciertas situaciones (como sucede con las clínicas psiquiátricas, o también – como en el sub lite – con los geriátricos), de lo que se sigue que en esos casos no resulta posible alegar el hecho de la víctima (vid. Picasso, Sebastián – Sáenz, Luis R. J., Tratado de Derecho de Daños, La Ley, Buenos Aires, 2019, t. I, p. 365).

A lo que acabo de mencionar se suma la circunstancia de que, como lo señaló esta sala anteriormente, cuando el damnificado es un consumidor, únicamente la culpa grave o el dolo de la víctima son hábiles para excusar la responsabilidad del proveedor (esta sala, L. n.º 591.873 - "R., F. y Otro c/ Parque de la Costa S.A. y Otro s/ Daños y Perjuicios", del 21/11/2012). En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho: "los usuarios y consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial, y por lo tanto no corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato comercial" (CSJN, Fallos, 331:819, 333:203), lo que equivale a exigir una culpa grave del consumidor o usuario para que ella pueda tener relevancia causal (vid. mi trabajo "La culpa de la víctima en las relaciones de consumo. Precisiones de la Corte Suprema", LL, 2/6/2008, p. 4).

En la especie, nos encontramos no solo ante una víctima consumidora, sino que se trata además de una persona anciana y con alzheimer, con lo que a la natural vulnerabilidad que corresponde a la primera categoría se suma la derivada de esa circunstancia. En ese sentido, en el derecho contemporáneo se ha desarrollado la categoría de los "subconsumidores", referida a personas particularmente débiles, tales como los ancianos, los niños o los enfermos, que requieren una protección acentuada con respecto al consumidor promedio (vid. Hernández, Carlos A., "La noción del consumidor y su proyección sobre la legitimación para accionar", Revista de Derecho privado y Comunitario, 2009-I-273; Alterini, Atilio A.- López Cabana, Roberto M., "La debilidad jurídica en la contratación contemporánea", DJ, 1989-I-817; Alterini, Atilio A., "El consumidor en la sociedad postmoderna", LL, 1996-E-818; Sozzo, Gonzalo, "El problema del deudor moroso frente a la emergencia económica", LLLitoral, 2002-1124; Vázquez Ferreyra, Roberto A., "El turismo y la tutela de los consumidores", RCyS, 2003-307; Wajntraub, Javier H., "Protección del asegurado en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor", LL, 2011-E-1138 ; Sprovieri, Luis E. – Dell'Oca, Gastón, Daños por productos elaborados, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 19). Al respecto, dice Lorenzetti: "El principio protectorio se acentúa en casos en los que se presenta una vulnerabilidad más grave que la que se verifica en el promedio de los casos. La vulnerabilidad que da lugar a la protección del consumidor está vinculada con una falla estructural del mercado, que da origen a una vulnerabilidad general, que afecta a toda la categoría de sujetos que realizan prácticas de consumo, y que es de orden económico, jurídico y técnico. La vulnerabilidad que da lugar a la protección

del subconsumidor está vinculada a fallas especiales que afectan a una categoría particular de sujetos. (...) Son casos de subconsumidores: los menores de edad, los ancianos, los enfermos graves, situaciones de urgencia que dan lugar a un estado de necesidad, los analfabetos" (Lorenzetti, Ricardo L., Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2009, p. 101).

Todas estas circunstancias contribuyen a subrayar la inanidad de señalar al obrar de la víctima como posible causa o concausa del daño, y ponen de manifiesto que el demandado no probó una imposibilidad absoluta, objetiva y no imputable de cumplimiento de su obligación de seguridad.

En consecuencia, hallándose probado el daño en el ámbito del geriátrico –lo que alcanza para tener por configurado el incumplimiento de la obligación de seguridad que pesaba sobre este–, y ante la circunstancia de no se pudo acreditar la eximente, considero que deberían rechazarse los agravios sobre este medular aspecto del debate y confirmarse esta parte de la sentencia apelada.

V. Corresponde ahora abocarme al estudio de los agravios referidos a los montos indemnizatorios concedidos en la instancia de origen.

Señalo, ante todo, que las quejas de ambas partes (actora y demandada) acerca de la cuantificación del rubro “incapacidad sobreviniente” no constituyen una crítica en los términos del art. 265 del Código Procesal. En efecto, el juez de grado explicó detenidamente por qué empleaba fórmulas matemáticas para el cálculo de la indemnización, y sobre esa base calculó el monto que finalmente concedió a la actora. Sin embargo, ninguno de los recurrentes esbozó una crítica concreta respecto de ese modo de cálculo y de los argumentos que el sentenciante proporcionó para fundarlo, y tampoco se controvierten las pautas que la sentencia tuvo en cuenta para llegar al resultado en cuestión. Por consiguiente, las quejas –que apuntan a una mera disconformidad con lo decidido– deben ser declaradas desiertas en los términos del ya citado art. 265 del Código Procesal.

b) Daño moral

El Sr. juez de grado reconoció por este rubro la suma de \$ 250.000. La actora solicita su elevación y los emplazados, su reducción.

Puede definirse al daño moral como: “una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” (Pizarro, Ramón D., Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en la diversas ramas del derecho, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 31).

En lo que atañe a su prueba debe señalarse que, a tenor del principio que sienta el art. 377 del Código Procesal, se encuentra en cabeza del actor la acreditación de su existencia y magnitud, aunque, en atención a las características de esta especial clase de perjuicios, sea muy difícil producir prueba directa en ese sentido, lo que otorga gran valor a las presunciones (Bustamante Alsina, Jorge, “Equitativa valuación del daño no mensurable”, LL, 1990-A-655).

En el caso, al haber existido lesiones físicas, la existencia de un daño moral es fácilmente presumible (art. 163 inc. 5, Código Procesal).

En cuanto a su valuación, debe recordarse lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que: “Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de

reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (...). El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para reestablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida” (CSJN, 12/4/2011, “Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros”, RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge Mario Galdós).

En otras palabras, el daño moral puede “medirse” en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial sufrido por la víctima (Galdós, Jorge M., “Breve apostilla sobre el daño moral (como “precio del consuelo”) y la Corte Nacional”, RCyS, noviembre de 2011, p. 259).

La misma idea resulta del art. 1741 in fine del Código Civil y Comercial, a cuyo tenor: “El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.

En el sub lite corresponde considerar las lesiones sufridas por la víctima, sumadas a su atención en el Hospital Piñeiro, y los demás malestares y angustias que pudo experimentar la demandante como consecuencia de un hecho como el de autos, más sus condiciones personales.

Ahora bien, al mes de febrero de 2014 la Sra. F. pidió por este rubro la suma de \$ 50.000 (fs. 10 vta.), y es sabido que nadie mejor que la víctima puede cifrar esta clase de perjuicios, en atención a su carácter subjetivo y personal. Por ese motivo, aun cuando el reclamo se haya sujetado –como en el caso a lo que en definitiva resultare de la prueba a producirse en autos (que además torna inviable el planteo efectuado por el demandado de que la decisión de primera instancia es ultra petita)–, no corresponde conceder más de lo solicitado si las producidas en el expediente no arrojan elementos adicionales a los que pudieron haber tenido en cuenta los actores al demandar respecto de este punto (esta sala, 22/8/2012, “R., Flavio Eduardo c/ Bayer S. A. y otros s. Daños y perjuicios”, L n° 584.026; ídem, 18/2/2013, “S., Sebastián Nicolás c/ Transportes Metropolitanos General Roca S. A. y otros s/ Daños y perjuicios”, L. n° 534.862). Sin perjuicio de ello tengo en consideración también que, por tratarse de una deuda de valor, es procedente que el juez fije el importe del perjuicio extrapatrimonial evaluando su cuantía al momento de la sentencia, aunque –por los motivos atinentes al carácter subjetivo del rubro, que ya he señalado– debe procurar mantener una razonable proporción con lo solicitado al momento de interponerse la demanda.

En estos términos, considero que el importe fijado en primera instancia resulta elevado. En consecuencia, propongo reducirlo a la suma de \$125.000; suma esta que, si bien era insuficiente para proporcionar a la actora (ya fallecida) satisfacciones sustitutivas de las consecuencias extrapatrimoniales del incumplimiento, es proporcional a lo que la propia demandante pidió en el año 2014.

b) Gastos de farmacia, radiografías y asistencia médica y traslados.

El anterior magistrado concedió por este ítem indemnizatorio la suma de \$ 10.000. El demandado solicita su reducción.

Debo señalar que no resulta necesaria una prueba concreta y específica de los gastos médicos y farmacéuticos sino que su erogación se presume en orden a la entidad de los hechos acreditados, aun cuando la atención haya sido prestada en hospitales públicos o por una obra social pues, de ordinario, esas entidades no cubren la totalidad de los gastos en que incurrir los pacientes (esta sala, 27/12/2011, “Morteyru, Juan Alberto y otro c. Juan, Gustavo Gabriel y otros s/daños y perjuicios”, RCyS 2012-VI, 251).

En consecuencia, teniendo en cuenta las lesiones sufridas por la demandante, considero que el importe fijado por este concepto debe ser confirmado. (art. 165 del Código Procesal).

V.- Respecto de los intereses el Sr. Juez de la instancia de origen aplicó la tasa activa desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago. El demandante solicita que a partir del del 1/8/2015 se aplique una vez y media la tasa activa. En cambio, la citada en garantía entiende que la tasa fijada por el sentenciante de grado genera un enriquecimiento sin causa para la actora, por lo que solicita la aplicación de una menor.

La cuestión ha sido resuelta por esta cámara en el fallo plenario dictado en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios”, del 20/4/2009, que estableció, en su parte pertinente: “2) Es conveniente establecer la tasa de interés moratorio. 3) Corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. 4) La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.

No soslayo que la interpretación del mencionado fallo plenario, y particularmente de la excepción contenida en la última parte del texto transcrito, ha suscitado criterios encontrados. Por mi parte estimo que una correcta apreciación de la cuestión requiere de algunas precisiones.

Ante todo, el propio plenario menciona que lo que está fijando es “la tasa de interés moratorio”, con lo cual resulta claro que –como por otra parte también lo dice el plenario– el punto de partida para su aplicación debe ser el momento de la mora. Ahora bien, es moneda corriente la afirmación según la cual la mora (en la obligación de pagar la indemnización, se entiende) se produce desde el momento en que se sufre cada perjuicio objeto de reparación. Por lo demás, así lo estableció esta cámara en otro fallo plenario, “Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transportes”, del 6/12/1958.

Así sentado el principio general, corresponde ahora analizar si en el sub lite se configura la excepción mencionada en la doctrina plenaria, consistente en que la aplicación de la tasa activa “en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.

En ese derrotero, la primera observación que se impone es que, por tratarse de una excepción, su interpretación debe efectuarse con criterio restrictivo. En consecuencia, la prueba de que se configuran las aludidas circunstancias debe ser proporcionada por el deudor, sin que baste a ese respecto con alegaciones generales y meras especulaciones. Será necesario que el obligado acredite de qué modo, en el caso concreto, la aplicación de la tasa activa desde el momento del hecho implica una importante alteración del significado económico del capital de condena y se traduce en un enriquecimiento indebido del

acreedor. En palabras de Pizarro: “La alegación y carga de la prueba de las circunstancias del referido enriquecimiento indebido pesan sobre el deudor que las alegue” (Pizarro, Ramón D., “Un fallo plenario sensato y realista”, en *La nueva tasa de interés judicial*, suplemento especial, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 55).

Así las cosas, no creo posible afirmar que la sola fijación en la sentencia de los importes indemnizatorios a valores actuales basta para tener por configurada esa situación. Ello por cuanto, en primer lugar, y tal como lo ha señalado un ilustre colega en esta cámara, el Dr. Zannoni, la prohibición de toda indexación por la ley 23.928 –mantenida actualmente por el art. 4 de la ley 25.561– impide considerar que el capital de condena sea susceptible de esos mecanismos de corrección monetaria. En palabras del mencionado colega: “La circunstancia de que, cuando se trata de resarcimientos derivados de hechos ilícitos, el juez en la sentencia estima ciertos rubros indemnizatorios a valores actuales –como suele decirse–, a los fines de preservar en equidad el carácter resarcitorio de la indemnización, no significa que se actualicen los montos reclamados en la demanda o se apliquen índices de depreciación monetaria”, pues tales mecanismos de actualización están prohibidos por las leyes antes citadas (Zannoni, Eduardo A., su voto in re “Medina, Jorge y otro c/ Terneiro Néstor Fabián y otros”, ésta cámara, Sala F, 27/10/2009, LL Online, entre otros).

Pero más allá de ello lo cierto es que, aun si se considerara que la fijación de ciertos montos a valores actuales importa una indexación del crédito, no puede afirmarse que la tasa activa supere holgadamente la inflación que registra la economía nacional, de forma tal de configurar un verdadero enriquecimiento del acreedor. La fijación de tasas menores, en las actuales circunstancias del mercado, puede favorecer al deudor incumplidor, quien nuevamente se encontrará tentado de especular con la duración de los procesos judiciales, en la esperanza de terminar pagando, a la postre, una reparación menguada –a valores reales– respecto de la que habría abonado si lo hubiera hecho inmediatamente luego de la producción del daño.

Por las razones expuestas no encuentro que se configure, en la especie, una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido de la actora, razón por la cual considero que debería confirmarse la tasa activa fijada en la sentencia en crisis, a partir del hecho (momento en que la obligación de reparar se tornó exigible) y hasta el efectivo pago.

La solución que propongo (es decir, la aplicación de la tasa activa establecida en la jurisprudencia plenaria) no se ve alterada por lo dispuesto actualmente por el art. 768, inc. “c”, del Código Civil y Comercial de la Nación, a cuyo tenor, en ausencia de acuerdo de partes o de leyes especiales, la tasa del interés moratorio se determina “según las reglamentaciones del Banco Central”. Es que, como se ha señalado, el Banco Central fija diferentes tasas, tanto activas como pasivas, razón por la cual quedará como tarea de los jueces, en ausencia de pacto o de la ley, la aplicación de la tasa de interés que corresponda (Compagnucci de Caso, Rubén H., comentario al art. 768 en Rivera, Julio C. – Medina, Graciela (dirs.) – Espert, Mariano (coord.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, La Ley, Buenos Aires, 2014, t. III, p. 97). Asimismo, y en referencia a la tasa activa fijada por el plenario “Samudio”, se ha decidido: “con relación a los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del nuevo Cód. Civil y Comercial de la Nación y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la tasa que resulte aplicable para liquidarlos por imperio del art. 768 del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior a la que aquí se dispone, pues ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias

económicas, iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño que se ha causado” (esta cámara, Sala B, 9/11/2015, “Cisterna, Mónica Cristina c/ Lara, Raúl Alberto s/ Daños y perjuicios”, LL Online, AR/JUR/61311/2015).

Adicionalmente, apunto que –como se ha dicho con acierto–, más allá de que el plenario recién citado se haya originado en la interpretación de una disposición legal hoy derogada (art. 622 del Código Civil), lo cierto es que los argumentos recién expuestos permiten trasladar las conclusiones de aquella exégesis a la que corresponde asignar a las normas actuales, máxime si se repara en que las tasas del Banco Nación deben suponerse acordes a la reglamentación del Banco Central (esta cámara, Sala I, 3/11/2015, “M., G. L. y otro c. A., C. y otros s/ daños y perjuicios”, RCyS 2016-III, 124).

Por todo lo que llevo dicho, mociono confirmar esta parte del fallo recurrido.

VI.- En relación al agravio referido a que corresponde que se aplique una sanción por temeridad y malicia, corresponde recordar que la norma contenida en el art. 45 del CPCCN autoriza la imposición de sanciones tendientes a reprimir la temeridad o malicia con que obraren los litigantes, conceptos éstos que revisten autonomía entre sí. La primera traduce la actitud de quien deduce pretensiones o defensas cuya falta de fundamentación no puede ignorar de acuerdo a pautas mínimas de razonabilidad, o dicho de otro modo, se configura ante la conciencia de la propia sinrazón. La segunda, en cambio, consiste en la utilización arbitraria de las facultades procesales con el deliberado propósito de obstruir el curso del proceso o demorar su decisión (Morello, Augusto M. – Sosa, Gualberto L. - Berizonce, Roberto O., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados, Abeledo Perrot, 1992, t II A, p. 833; Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado, concordado y comentado, Abeledo Perrot, 1994, t. I, p. 342).

Su aplicación requiere que medien circunstancias verdaderamente graves, que configuren típicamente la conducta procesal incorrecta que se encamina a reprimir, puesto que no debe olvidarse que la consecuencia habitual para quien promueve una demanda injusta o se defiende de ese modo, es la imposición de las costas (esta sala, libre n° 154.879 del 8/3/1995).

En éste orden de ideas, considero que las circunstancias descriptas por el recurrente en su expresión de agravios carecen de elementos aptos para la imposición de tan estricta sanción procesal. Por ello, entiendo que este planteo debe ser rechazado.

Finalmente, respecto al planteo referido a la supuesta plus petitio inexcusable, es sabido que este no es por sí suficiente para la eximición de costas, en tanto es preciso que la demandada haya admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia y, además, debe ser inexcusable, es decir, importar una pretensión mucho mayor de la debida, a sabiendas o por negligencia grave (art. 72 del ordenamiento ritual; esta sala, 25/4/2013, “Rodríguez, Facundo Manuel c/ Cichero, Guillermina Noemí y otros s/ Daños y Perjuicios”).

La pluspetición es inexcusable cuando media mala fe del peticionante, es decir, cuando se pide más de lo debido, sin razón, esto es, sabiendo o debiendo saber que el monto excede lo racional (Colombo – Kiper, op. cit., t. I, p. 514).

Como puede observarse, estos requisitos tampoco se encuentran reunidos en autos, máxime cuando la actora sujetó su reclamo a lo que en más o menos resultare de las probanzas de autos (fs. 7). Mociono, entonces, confirmar esta parte de la sentencia recurrida.

VII.- En atención al resultado de los agravios de los apelantes, en los términos del art. 68

del Código Procesal juzgo que las costas de alzada deberían imponerse a los emplazados, quienes resultarían sustancialmente vencidos.

VIII. En síntesis, y para el caso de que mi voto fuere compartido, propongo al acuerdo rechazar el recurso de la actora y hacer lugar parcialmente al de los emplazados, y en consecuencia: 1) modificar la sentencia en el sentido de reducir el monto de condena del rubro “daño moral” a la suma de \$ 125.000; 2) confirmar el pronunciamiento apelado en todo lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravios, y 3) imponer las costas de alzada a los emplazados.

A la misma cuestión, el Dr. Molteni dijo:

Adhiero al voto del Sr. Juez preopinante, con algunas aclaraciones y una disidencia.

1º.- En primer lugar, en lo concerniente al “daño moral”, es preciso mencionar que éste se configura por todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación de orden patrimonial. Es el menoscabo en los sentimientos, consistente en los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser consecuencia del hecho perjudicial (conf. Llambías, J. J., “Tratado de Derecho Civil - Obligaciones”, t. I, págs. 297/298, n° 243).

Para la determinación del monto indemnizatorio no se requiere prueba de su entidad, pues se lo tiene por acreditado con la sola comisión del acto antijurídico, vale decir, que se trata de una prueba “in re ipsa”, que surge de los hechos mismos (conf. Sala “A”, votos del Dr. Jorge Escuti Pizarro en causas n° 191.386 del 22/5/96 y n° 207.360 del 16/12/96; mis votos en libres n° 165.704 del 22/5/95 y n° 214.108 del 16/5/97, entre muchos otros).

El art. 1099 del Código Civil derogado resulta contundente al establecer que la acción conducente a la reparación del agravio moral no se transmite a los herederos y sucesores universales del agraviado, a menos que hubiese ya sido entablada por el difunto (Conf. CNCiv., en pleno, ED, T°72, pág. 320). Este es, pues, el supuesto que se configura en el caso, dado que el reclamo fue iniciado por la Sra. C. L. F. y, fallecida ésta, la acreencia que por daño moral se le reconozca, se transmitirá a sus herederos (“iure hereditatis”).

Cuando estamos en presencia de los perjuicios originados en el incumplimiento contractual (como el presente caso, en el cual se vulneró el deber de adoptar las medidas necesarias para preservar la salud de la reclamante inicial), la norma del art. 522 del Código Civil, a diferencia de lo preceptuado por el art. 1078, no se expresa en forma imperativa, ni establece una indemnización automática puesto que la deja librada al prudente arbitrio judicial. En ese sentido, se ha expresado también reiteradamente esta Sala, en consonancia con abundantes precedentes jurisprudenciales, restringiendo su ámbito de aplicación para no atender reclamos que respondan a susceptibilidades excesivas o que carezcan de significativa trascendencia jurídica, al punto que el mero estado de incertidumbre o cualquier contingencia desfavorable propia de la vida de los negocios carecerían de aptitud para generar un dolor anímico digno de reparación (conf. Llambías “Tratado de derecho civil- obligaciones”, t. II- A, p. 182, Borda “Tratado de Derecho Civil- Obligaciones” pág. 94, Cazeaux - Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones” t. I, p. 382, 2da. ed.; esta Sala mi voto en L. n° 40.925 del 21/4/89; n° 40767 del 24/11/89 ; voto del Dr. Escuti Pizarro en n° 255.232 del 12/11/98 y sus citas, entre muchos otros).

Establecido ello, considero que debe tenerse en cuenta que la actora contaba con ochenta y siete años de edad al momento de sufrir el accidente en el establecimiento geriátrico del cual el emplazado resultara titular, y que fue trasladada al Hospital Piñero, en el cual le

diagnosticaron fractura de codo derecho. Permaneció internada por dos semanas en ese nosocomio y su restablecimiento le insumió un período superior a treinta días.

Sin embargo, luego de esa caída, la octogenaria ya no pudo afrontar de la misma manera su vida cotidiana, requiriendo acompañamiento para sus movimientos; máxime tratándose de una mujer que no deambulaba por sus propios medios. La partida merece ser valuada hasta el deceso de la Sra. F. ocurrido once meses después del accidente, esto es, el 9 de febrero de 2014.

Tal como se concluye en el primer voto, entiendo que el monto que le fue acordado en la sentencia de grado resulta elevado, atendiendo a las afecciones y angustia que la fallecida actora debió padecer durante esos once meses.

Por tal motivo, con estas aclaraciones, propongo también reducir esta partida a la suma sugerida por el Dr. Picasso (\$ 125.000).-

2°.- Desde otro ángulo, habré de disentir, asimismo, en punto a la tasa de interés aplicable al caso.

De acuerdo a lo establecido por la doctrina plenaria sentada por esta Cámara Civil en los autos “Samudio de Martínez, Ladislao c/ Transporte Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” del 20/04/09, sobre el capital reconocido corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Empero, toda vez que en la especie se fijaron los valores indemnizatorios al momento del dictado de la sentencia de grado, la indicada tasa no debería regir desde el origen de la mora, porque si así fuese se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido, tal como puntualmente prevé la parte final de la referida doctrina plenaria, al contemplar una excepción a la vigencia de la tasa moratoria legal. Ello así, en la medida de que uno de los factores que consagran la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida de valor de la moneda, extremo que en la especie ya fuera ponderado al definir el capital a los valores actualmente vigentes.

Ahora bien, el art. 768 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece que el interés moratorio legal será el que surja de la convención de las partes o, en su defecto, del impuesto por leyes especiales y por último de las “tasas que se fijan según la reglamentación del Banco Central”, ya que esta última hipótesis –que sería la que corresponde al caso de autos- comenzaría a regir a partir del 1° de agosto de 2015 y respecto de los intereses que fluyan con posterioridad a esa fecha, en que entrara en vigencia el nuevo ordenamiento. En el período anterior regía la doctrina del plenario “Samudio”, que facultaba a los jueces a morigerar la tasa bancaria allí establecida en caso de producirse con su aplicación un enriquecimiento indebido, lo que brinda fundamento a la utilización de una tasa pura en el lapso que se devengó desde el accidente.

Pero respecto del tiempo posterior a la vigencia del nuevo ordenamiento, debe aplicarse la referida tasa activa, que es una de las autorizadas por las reglamentaciones del Banco Central, tal como lo exige la nueva norma que regula el interés moratorio de fuente legal.

Por otro lado, la pretensión de la parte actora de establecer una tasa superior a la activa, no encuentra sustento legal, por cuanto el ordenamiento citado no prevé la fijación de una tasa de interés, de las características pretendidas. Es por ello que considero inatendibles las críticas introducidas por la demandante.

En consecuencia, siguiendo el criterio mayoritario de esta Sala, correspondería que desde el inicio de la mora, tal como lo propone el Sr. Juez de grado (31 de marzo de 2013) y hasta la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (1° de

agosto de 2015), se calculen los intereses a la tasa de interés del 8% anual y desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Con estas aclaraciones y disidencia apuntada, adhiero en lo restante al voto del Dr. Picasso, como también respecto al régimen de costas propuesto.

A la misma cuestión, el Dr. Li Rosi dijo:

Por razones análogas a las vertidas por el Dr. Sebastián Picasso, adhiero a la solución propuesta con todas las salvedades formuladas por el Dr. Hugo Molteni.

Con lo que terminó el acto.

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala “A” de la Excm. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, 29 de octubre de 2019.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se resuelve: 1) modificar la sentencia en el sentido de reducir el monto de condena del rubro “daño moral” a la suma de \$ 125.000; 2) fijar desde el inicio de la mora el 31/03/2013, y hasta la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación el 1/8/2015, los intereses a la tasa de interés del 8% anual y desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; 3) confirmar el pronunciamiento apelado en todo lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravios, y 4) imponer las costas de alzada a los emplazados.

Los honorarios serán regulados una vez establecidos los de la instancia anterior.

Notifíquese en los términos de las Acordadas 31/11, 38/13 y concordantes, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. en la forma de práctica y devuélvase.

Fdo.: SEBASTIÁN PICASSO (EN DISIDENCIA PARCIAL) - HUGO MOLTENI - RICARDO LI ROSI

Citar: elDial AAB989

Publicado el: 1/9/2020

copyright © 1997 - 2020 Editorial Albrematica S.A. - Tucumán 1440 (CP 1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina